



AUTO

SALA FISCAL Y SANCIONATORIA

NÚMERO: ORD-801119- 078 - 2023

FECHA: 4 DE JULIO DE 2023

PÁGINA NÚMERO: 1 de 24

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

TIPO DE PROCESO: **Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal
PRF- 88112-2017-002**

ENTIDAD AFECTADA: **CAMARA DE REPRESENTANTES NIT. 899.999.098-0**

**PRESUNTOS
RESPONSABLES
FISCALES:** DIANA ROJAS BRIÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.967.933, en su calidad de Jefe de División de Personal de la Cámara de Representantes.

BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.755.873 en su calidad de Jefe de la División Financiera de la Cámara de Representantes.

**TERCEROS CIVILMENTE
RESPONSABLE:** SEGUROS COLPATRIA S.A. NIT No. 860.002.184-6

CUANTÍA: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$ 896.044.974) sin indexar.

**PROVIDENCIA
APELADA:** Auto No. URF1-00054 de 17 de marzo de 2023, *"Por medio de la cual se resuelven peticiones probatorias y se reconoce personería jurídica dentro del proceso de responsabilidad fiscal"*.

PRIMERA INSTANCIA: Contralora Delegada Intersectorial No. 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República.

**LA CONTRALORA DELEGADA INTERSECTORIAL No. 4
DE LA SALA FISCAL Y SANCIONATORIA.**

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra el Auto No. 00054 de 17 de marzo de 2023, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 01 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta los siguientes:



AUTO

SALA FISCAL Y SANCIONATORIA

NÚMERO: ORD-801119- 078 - 2023

FECHA: 4 DE JULIO DE 2023

PÁGINA NÚMERO: 2 de 24

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal:

El origen de la presente actuación se encuentra en los hallazgos fiscales establecidos por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría General de la República, a través de la cual se relacionaron presuntos pagos indebidos durante los años 2011 a 2015 en la Cámara de Representantes, al reconocer y pagar una prima técnica a once (11) funcionarios de dicha Corporación.

Es así que, de conformidad con los autos de apertura de responsabilidad fiscal y formulación de cargos, la conducta fáctica endilgada a las implicadas fue descrita, así:

DIANA ROJAS BRIÑEZ

"(...) De conformidad con los soportes documentales visibles en el CD a folio 9 del expediente, Diana Rojas Briñez, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.967.933 se desempeñó como Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2011 y el 25 de octubre de 2014.

Fue por el ejercicio de ese cargo que se vinculó como presunta responsable fiscal, dado que suscribió con visto bueno las Resoluciones Nos.1356,1354,1348,1352,1349,1346,1350,1358,1361,1355 de fecha 1 de junio de 2011, mediante las cuales reconoció la prima técnica por evaluación de desempeño a 11 empleados de la Cámara de Representantes, sin que estos tuvieran derecho a percibir tal asignación, por no cumplir con el presupuesto normativo transicional, al estar calificados por debajo del 90% (...)"

BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA

"(...) Blanca Emma Salazar Bonilla fue también vinculada, mediante Auto 000245 del 8 de junio de 2018 a la presente actuación en virtud de su condición de Jefe de la División Financiera de la Cámara de Representantes, entre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 27 de marzo de 2015, como así lo indica la certificación anexa a folio 138,143 y 146 del expediente.

Fue convocada a esta causa fiscal porque en el ejercicio del cargo avaló con visto bueno la asignación de la prima técnica de varios funcionarios de la Cámara de Representantes, suscribiendo las Resoluciones Nos. 1356,1354,1348,1352,1349,1346,1350,1358,1361,1355 de fecha 1 de junio de 2011

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago, sin tener en cuenta que los citados no tenían derecho a percibir dicha asignación. (...)"

1.2. Principales Actuaciones Procesales.

Visto el expediente, se destacan las siguientes actuaciones surtidas por la instancia de origen:

- Auto No. 008 de 6 de febrero de 2017, mediante el cual la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras inició la Indagación Preliminar (Folio 29 a 36 C 1).
- Auto No. 000245 del 8 de junio de 2018, mediante el cual se abrió proceso de responsabilidad fiscal. (Folios 1152 a 1164 C 6).
- Oficio No. 2019ER0004620, mediante el cual Blanca Emma Salazar Bonilla rindió diligencia de versión libre. (Folios 1409 a 1426).
- Resolución No. REG-EJE-00632020, el Contralor General de la República suspendió los términos procesales en los asuntos fiscales a nivel nacional, desde el 16 al 31 de marzo de 2020, a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, siendo prorrogada a través de la Resolución No. REG-EJE-064-2020, a partir del 1 de abril de 2020. Finalmente a través de Resolución No REGEJE-0070-2020, ordenó reanudar los términos procesales a partir del 15 de julio de 2020.
- Auto No. URF1-0234-0115 de 29 de junio de 2021, mediante la cual se fijó fecha para la práctica de versión libre de DIANA ROJAS BRIÑEZ, la cual fue rendida por escrito el 17 de julio de 2021. (Folios 1544 a 1546).
- Auto No. URF1-0234 del 2 de diciembre de 2021¹, mediante el cual se decidió el archivo de las diligencias, decisión que fue revocada parcialmente por la Sala Fiscal y Sancionatoria a través de Auto No. ORD-80119-294 de 30 de diciembre de 2021², para continuar las mismas contras las investigadas.
- Auto No. URF1-0277 de 27 de diciembre de 2022, mediante el cual se imputó responsabilidad fiscal a Blanca Emma Salazar Bonilla y a Diana Rojas Briñez. (Folios 1624 a 1637).

¹ Folios 1552 a 1561

² Folios 1564 a 1575

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

- Dentro del término de traslado, los apoderados de las investigadas presentaron descargos y solicitaron la práctica de pruebas y la nulidad de la actuación. (Folios 1662 y siguientes).
- Auto No. URF1-00054 de 17 de marzo de 2023, mediante el cual la primera instancia resolvió la solicitud probatoria, negando algunas de las solicitadas, así como decidió que no se pronunciaría frente a la nulidad planteada hasta resolver de fondo en el fallo correspondiente. (Folios 1791 a 1799).
- Luego de ser interpuestos los recursos de reposición y en subsidio apelación, la primera instancia confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación ante esta Sala Fiscal y Sancionatoria. (Folios 1824 a 1829).
- Oficio No. 2023IE0055542 del 1 de junio de 2023 (recibido el 2 de junio siguiente), la Contralora Delegada Intersectorial No. 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, remitió el expediente No. PRF-8112-2017-002 a efectos de que se resuelva recurso de apelación contra el auto que negó algunas de las pruebas solicitadas.

II. DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO

La Contraloría Delegada Intersectorial No. 01 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, profirió el Auto No. URF1-00054 de 17 de marzo de 2023, por medio del cual decretó unas pruebas y rechazó la solicitud de otras.

En cuanto a las pruebas solicitadas por el apoderado de **DIANA ROJAS BRIÑEZ** y negadas, se dijo:

Documentales:

1. *"Solicitud de Copia Integra de la hoja de vida de la investigada, indicando todas las situaciones administrativas, incluyendo incapacidades":* Negó parcialmente la referente a la hoja de vida, pues ya se contaba con la misma en el expediente.
2. *"Solicitar a la Cámara de Representantes informe, relacione y allegue copia -entre las fechas del 1 de febrero de 2011 al 30 de junio de 2011- de todos los actos administrativos firmados o visados por mi defendida, DIANA ROJAS BRIÑEZ, en su*

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

calidad de Jefe de la División de Personal, incluyendo todo lo relacionado con las situaciones administrativas de los funcionarios de planta de la Cámara y los de UTL". Al respecto, la Contralora Delegada de primera instancia, desestimó la petición, al considerarla impertinente y carecer de utilidad para lo que busca probar el apoderado referente a demostrar que no existió culpa grave en la actuación de la doctora Rojas, pues su apoderada tenía excesiva carga laboral.

- 3. "Solicitar a la Cámara de Representantes se envíe (sic) copia integra de la hoja de vida de la señora JIMENA DEL PÍLAR RUÍZ VELASQUEZ, y se informe para la fecha de mayo y junio de 2011 en qué oficina se encontraba desarrollando sus funciones. Esta prueba pretende demostrar que no existió culpa grave por parte de la doctora Rojas, teniendo en cuenta que las conductas que se le imputan están justificadas en la medida en que tenía una excesiva carga laboral lo que le permitió confiar en la funcionaria con formación y experiencia suficientes en la entidad frente a temas jurídicos y de personal". La anterior solicitud probatoria la negó el despacho de origen por impertinente como el cargo desempeñado por la persona sobre quien va dirigida la prueba, junto con sus funciones asignadas por ley y sus calidades no son objeto de investigación en la causa fiscal que ocupa la atención del despacho, ni ésta vinculada a la misma.*
- 4. "Solicitar a la Cámara de Representantes se envíe relación y copia de todos los actos administrativos de la corporación por medio de los cuales se reconocieron y reglamentaron lo referente a primas técnicas proyectados por la funcionaria JIMENA DEL PILAR RUÍZ VELASQUEZ. Esta prueba tiene como finalidad demostrar la experticia y experiencia de la funcionaria que proyecto los actos administrativos objeto de estos procesos, para justificar la confianza de la investigada depositó en su trabajo". Dicha solicitud fue negada por impertinente atendiendo lo dicho anteriormente.*
- 5. "Solicitar a la Cámara de Representantes se informe -entre el 01 junio del año 2011 y el 31 de octubre del 2013- qué servidores tenían la facultad de disponer, manejar o administrar recursos o fondos públicos relacionados con bienes o de contenido económico en la corporación y se informe con base en qué norma se encuentra regulado. Esta prueba tiene como objeto demostrar que DIANA ROJAS BRÍÑEZ, en su calidad de Jefe de la División de Personal no ejercía gestión fiscal, porque no tenía la facultada de disposición o administración de recursos del erario". Dicha solicitud fue denegada por impertinente y no ser útil para el proceso, ya que el objeto de dicha*



AUTO

SALA FISCAL Y SANCIONATORIA

NÚMERO: ORD-801119- 078 - 2023

FECHA: 4 DE JULIO DE 2023

PÁGINA NÚMERO: 6 de 24

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

solicitud se deriva de la ley y la gestión de los servidores vinculados a la actuación, por lo que consideró que el medio de prueba solicitado no era idóneo para tal fin.

Testimoniales:

1. *"Se cite y practique diligencia de declaración juramentada de los funcionarios a quienes les fue reconocida la prima técnica objeto de investigación respecto de las siguientes personas: 1. CAYO RICARDO BUITRADO ESPEJO 2. HAROL ALFONSO BUSTAMANTE SOTO 3. ROSALBA CARVAJAL PARRA 4. CARMENZA CRUZ PARRA 5. GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO 6. DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ 7. HUMBERTO GUERRERO ACOSTA 8. ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO 9. AMANDA TINJACA RUIZ 10. HERNANDO RODRIGUEZ CASTILLA 11. ALVARO TORRES TELLEZ Con la finalidad de que detallen como se realizó todo el proceso de solicitudes previas y de otorgamiento de beneficio mediante las resoluciones de prima técnica, entre otros aspectos". Solicitud probatoria que fue negada por la primera instancia por inconducente y no ser útil para el proceso, pues su objeto se encuentra descrito en el ordenamiento correspondiente del cual ya se cuenta con soporte documental, por lo que concluyó en que el medio solicitado no es idóneo para tal fin.*
2. *"Se cite y practique diligencia de declaración juramentada al señor JAIRO JARAMILLO MATÍZ, Director Administrativo de la época. Este testimonio se solicita con la finalidad de demostrar que la suscripción de las resoluciones por parte de la investigada no comportó gestión fiscal y por lo mismo no fueron causa determinante para la producción del daño" Solicitud que igualmente fue negada por carecer de los requisitos de utilidad y conducencia, al considerar que, la calidad de gestor fiscal no se determina por la asignación, certificación o mención en tal sentido de ningún funcionario, luego concluyó que la prueba solicitada para esa finalidad no resultaba idónea.*
3. *"Se cite y practique diligencia de declaración juramentada al señor CARLOS ALBERTO FLORES ROJAS, jefe de la Dirección Jurídica de la época. Este testimonio se pide con la finalidad de que se informe los antecedentes judiciales y jurídicos de las resoluciones expedidas respecto del otorgamiento de prima técnica objeto de investigación y todo lo relacionado con la expedición de ésta. Se solicita se pida la última dirección física, de correo electrónico de la anterior persona a la Cámara de Representantes para la citación a dicha diligencia ya que se desconoce su actual ubicación"*

"Se cite y practique diligencia de declaración juramentada a la señora JIMENA DEL PILAR RUÍZ VELASQUEZ, funcionaria asesora que proyectó los actos administrativos de

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

otorgamiento de primas técnicas. Este testimonio se pide con la finalidad de que se informe los antecedentes judiciales y jurídicos de las resoluciones expedidas respecto del otorgamiento de prima técnica objeto de investigación y todo lo relacionado con la expedición de estas".

El despacho de origen negó la práctica de las mismas por carecer de los requisitos de utilidad y conducencia, aduciendo que la finalidad con que fueron solicitadas no era objeto directo de debate en la actuación, así mismo adujo que el trámite y expedición de los actos administrativos originarios del daño investigado, ya estaba establecido, conforme las disposiciones normativas que lo regulan y reposaban en el expediente.

Finalmente, el Despacho señaló en lo que respecta a la solicitud de nulidad propuesta en los descargos que, como ésta versaba sobre argumentos de defensa, serían resueltos al momento de emitir pronunciamiento de fondo.

En cuanto a las pruebas solicitadas por el apoderado de **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA**, la primera instancia sostuvo:

Testimoniales:

1. *"Se escuche en diligencia de declaración juramentada a: CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; JAIRO JARAMILLO MATIZ, Director Administrativo de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS, Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; ALVARO DE JESUS MIERS GUTIERREZ, Jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes para la época de los hechos y sigue actualmente en el mismo cargo; El servidor o servidora que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010 en donde se "Consideró la viabilidad jurídica de reajustar primas técnicas de funcionarios de planta de personal vinculados a carrera administrativa cuantos están en encargo", lo cual se podrá realizar una vez se allegue al expediente copia del mismo, lográndose la identidad de quien lo suscribió".*

Sostuvo el apoderado que las mismas eran conducentes, pertinentes y útiles para la presente investigación, toda vez que fueron las personas que en su momento conocieron de primera mano los fundamentos fácticos y jurídicos de la viabilidad de otorgar la prima técnica a los funcionarios mencionados en las Resoluciones Nros. 1356, 1354, 1348, 1349, 1350, 1358, 1361 y 1355 de

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

fecha 1º de junio de 2011. Así mismo, *"informarían al Despacho, el procedimiento de estudio, evaluación, aprobación y ejecución del reconocimiento y pago de las primas técnicas cuestionadas, indicando qué dependencias realizaron cada una de dichas etapas; De otra parte, se conocería de primera mano cuales fueron los fundamentos que tuvo el funcionario o funcionaria que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010"* mediante el cual se *"Consideró la viabilidad jurídica de reajustar primas técnicas de funcionarios de planta de personal vinculados a carrera administrativa cuantos están en encargo"*, el cual permitió la viabilidad del otorgamiento de la aludida prima técnica; finalmente, se les interrogaría cuál fue la función que en dicho proceso tuvo a cargo su investigada en calidad de Jefe de la División Financiera y Presupuesto de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes para la época de los hechos".

Al respecto, la primera instancia consideró que dichas solicitudes no cumplían con los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia, señalando que el objeto para el cual se solicitaban correspondía al procedimiento dispuesto para la elaboración de los actos administrativos originarios del presunto daño fiscal investigado, el cual se encontraba reglado, además que ya obraba en el expediente soporte documental. De igual manera, sostuvo que negaba la solicitud de convocar a la persona que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010, pues el valor probatorio de dicho elemento de conocimiento se encontraba en su contenido, sin que se reprobara en momento alguno su origen o legitimidad.

Documentales:

1. *"Se solicite a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, haga llegar con destino al presente proceso, copia de la nota interna que el Director Administrativo y Financiero de entonces (Dr. Jairo Jaramillo Matíz), le dirigiera a la Dra. BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, en calidad de Jefe de la División Financiera y Presupuesto de dicha Corporación, solicitándole disponer el rubro presupuestal necesario para la provisión y pago de las primas técnicas autorizadas en las resoluciones Nros. 1356, 1354, 1348, 1349, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 1º de junio de 2011"*

Sostuvo el apoderado que la misma era conducente, pertinente y útil para la presente investigación, toda vez que con ella se podría corroborar que la principal función realizada por su defendida en el trámite del aval y suscripción de las resoluciones, correspondió netamente el de apropiación presupuestal "ordenada" por el entonces Director de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, es decir, el documento por medio del cual debía cumplir una orden de su superior.

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

Al respecto, el Despacho de origen la negó, al considerar que no reunía los requisitos de utilidad, conducencia ni pertinencia, manifestando que las funciones desempeñadas por BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA en su calidad de Jefe de la División Financiera y Presupuesto se encontraban regladas y la certificación de las mismas obraba en el expediente, considerando que dichos medios de prueba versaban sobre el mismo objeto y en consecuencia se tornaban reiterativos, por lo que no eran útiles para la celeridad del proceso.

2. *"Se solicite a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, haga llegar con destino a la presente investigación copia del Manuel (sic) de procedimiento que para la época de los hechos tuvo en cuenta para la evaluación de desempeño de sus funcionarios de carrera administrativa, con miras al estudio, evaluación, aprobación y ejecución de las primas técnicas otorgadas a los funcionarios beneficiados con las resoluciones Nros. 1356, 1354, 1348, 1349, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 1º de junio de 2011".*

Al respecto, el Despacho de instancia señaló que mediante Auto URF1-0190 del 23 de agosto de 2022, de manera oficiosa decretó la práctica de una prueba adicional, cuyo objeto versaba sobre lo solicitado por el apoderado, por lo que ya se contaba en el expediente con prueba al respecto y en virtud de ello negó la misma.

De otro lado, la defensa de la investigada solicitó que se le permitiera a ella rendir ampliación de su versión libre, una vez recaudadas las pruebas relacionadas a efecto de que se pronuncie frente a cada una de ellas y pueda dar sus explicaciones frente a la imputación de responsabilidad fiscal objeto del presente proceso, petición que fue negada por la primera instancia, al considerar que ello no era una prueba como tal y que este derecho había sido ejercido por la implicada, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 610 de 2000.

En cuanto a la nulidad planteada por el apoderado, sostuvo que sería resuelta de fondo al momento de resolver el fallo.

III. DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

Notificados de la anterior decisión, los apoderados de las implicadas presentaron recursos de reposición y en subsidio apelación, así:

Recurso interpuesto por el apoderado de **DIANA ROJAS BRIÑEZ:**

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

En primera medida solicitó se resuelva la solicitud de nulidad incoada, pues además de encontrarse vencido el término que tenía la primera instancia para resolver la misma y omitiendo su petición, decidió continuar el proceso.

Respecto a la negativa de pruebas, manifestó su inconformidad, sosteniendo que las mismas tenían el propósito de demostrar que no existió el elemento de culpa, que su cliente no realizaba gestión fiscal y que además se estaba ante la ausencia de nexo causal, reiterando las solicitadas y descritas arriba como negadas.

Recurso incoado por el apoderado de **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA:**

El recurrente argumentó sobre la importancia del decreto de las pruebas solicitadas, para posteriormente exponer respecto de cada una de ellas, las razones por las cuales el a quo no debió negarlas, así:

Consideró que las pruebas testimoniales solicitadas se orientaban a probar lo que sustentó en sus descargos, pues fueron diversos servidores los encargados del estudio, evaluación aprobación y ejecución de actos administrativos que otorgaron unas primas técnicas amparadas en una presunción de legalidad, seguridad y certeza, por lo que resultaba importante escucharlos para que dieran cuenta de su actuar al respecto, así como su criterio profesional, jurídico y razonamiento sobre la materia que los llevaron a la elaboración de los mismos.

Sobre las pruebas documentales relacionadas arriba, referentes a la nota interna que le fue enviada a su defendida y vistos buenos solicitados, dijo que era importante decretarla, pues probaba que la función de su prohijada correspondía única y exclusivamente al hecho de acreditar la existencia presupuestal.

Finalmente, reiteró la solicitud de que su defendida sea escuchada en diligencia de ampliación de versión libre, luego de recaudarse el acervo probatorio solicitado.

IV. AUTO QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN

Mediante Auto No. URF1-00143 de 30 de mayo de 2023, la Contralora Delegada Intersectorial No. 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, resolvió los recursos de reposición, confirmando la decisión recurrida y concedió los de apelación.

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

En primer término, frente a los argumentos presentados por el abogado de BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, sostuvo que *"la responsabilidad aquí investigada, y más presente cada uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, atañen únicamente a BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA y a sus funciones como jefe de la División Financiera y Presupuesto de la Cámara de Representantes que cuentan con consagración legal, aspecto sobre el cual, además, el Despacho ya cuenta con suficiente material probatorio recaudado, en modo tal que continuar recaudando pruebas sobre ese mismo aspecto, claramente resulta superfluo y además carece de utilidad para el proceso, sin dejar de lado que contraviene el desarrollo procesal célere de esta causa fiscal. De allí que la negativa de los medios de prueba solicitados en ese sentido, deba mantenerse en tanto y cuando no aportan elementos nuevos que puedan ser valorados por el Despacho"*

Reiteró que el artículo 42 de la Ley 610 de 2000, en relación con el ejercicio del derecho de defensa y la facultad para rendir exposición libre y espontánea señala que se hará antes de que se formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, por lo que habiéndose escuchado a su apoderada anteriormente, consideró improcedente adelantar dichas diligencias nuevamente, afirmando que si bien las garantías procesales, por amplias que sean, debían ejercerse dentro de un marco procesal delimitado, en consonancia con un desarrollo lógico, célere y armónico del proceso.

Ahora bien, en cuanto al recurso interpuesto por la defensa de **DIANA ROJAS BRÍÑEZ**, confirmó la negativa, pues consideró que no se trajo argumento adicional alguno que conllevará a reconsiderar la decisión. No obstante, más adelante adujo en relación con los soportes documentales de cada actuación adelantada por la investigada en el ejercicio del cargo, que: *"aun cuando se haya mencionado una sobrecarga laboral como argumento de defensa para desechar cualquier actuación de mala fe de su parte, es necesario reiterar que dicha circunstancia no es de resorte del proceso de responsabilidad fiscal, habida consideración que, de un lado, las funciones de dicho cargo cuentan con regulación legal cuyo soporte ya reposa en el expediente, y de otro, que una situación indicativa de sobrecarga laboral no se podría establecer simplemente presentando un compendio de todas las actuaciones que en virtud del cargo en cuestión se hayan realizado"*.

Adicionalmente estimó que *"el recurrente ha desconocido la obligación que le asiste de conformidad con el inciso 1 del artículo 167 del Código General del Proceso, que en esencia, impone la obligación a aquél extremo que pretenda traer un hecho como fundamento de sus argumentos de defensa, de traer los medios de prueba que soporten su dicho, principio que claramente se ha visto desconocido por el recurrente, pues pretende recibir testimonio de 14 ex*

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

funcionarios de la Cámara de Representantes, respecto de quienes no aportó siquiera sus datos de ubicación para ser contactados"

Y respecto a las pruebas testimoniales solicitadas, reiteró lo dicho arriba al resolver el recurso, aduciendo que, todos los aspectos mencionados por el recurrente, encontraban consagración en la ley o ya cuentan con el debido soporte probatorio en el expediente, así mismo, que no resultaba conducente, útil ni mucho menos pertinente para el proceso engrosar el expediente con medios de prueba que no aportaran hechos nuevos a los ya acreditados, aunado a la dilatación del proceso que podría traer.

Finalmente, señaló en cuanto a la nulidad propuesta que se efectuaría un pronunciamiento al momento de emitir el correspondiente fallo, como quiera que dicha petición estuvo basada en argumentos relacionados con los elementos de la responsabilidad fiscal y es precisamente en el fallo donde debería realizarse dicho análisis.

V. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia.

La Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Sala Fiscal y Sancionatoria es competente para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra el **Auto No. 00054 de 17 de marzo de 2023**, por medio del cual se resolvió unas solicitudes de pruebas dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 267 y 268 de la Constitución Política, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, el artículo 5 del Decreto 405 de 2020, mediante cual se adicionó el artículo 42 E al Decreto Ley 267 de 2001 y especialmente lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Resolución Organizacional No. OGZ-0828-2023.

5.2. Del recurso de apelación en la norma:

Son apelables en general, las providencias que resuelvan el fondo del asunto de manera definitiva y los autos que de manera expresa lo contemplen, es decir, el fallo será objeto de dicho recurso, pero siempre que la cuantía del daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación supere la menor cuantía para la contratación de la entidad afectada con los hechos tal como lo dispone el artículo 102 cuarto inciso de la Ley 1474 de 2011. También procede el

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

recurso de apelación, entre otras, contra la decisión de negar total o parcialmente las pruebas solicitadas o allegadas, así como contra la que resuelve sobre la solicitud de nulidad y el decreto de medidas cautelares, en los procesos de doble instancia.

Ahora bien, en el proceso ordinario fiscal, el termino para interponer el recurso de apelación se contempló en cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, tal como lo dispone el artículo 51 de la Ley 610 de 2000. En concordancia con ello, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los artículos 77 y siguientes dispone el procedimiento y requisitos para la interposición del recurso de apelación.

Resulta necesario verificar, conforme a lo establecido en materia fiscal respecto a los recursos de apelación, si estos fueron interpuestos dentro del término de ley. En consideración a lo normado y a los oficios de radicación de los recursos objeto de estudio se tiene que estos fueron presentados entre los días 28 y 29 de marzo de 2023, una vez fuera notificada la decisión mediante estado No. 051 del 22 de marzo de 2023.

Para el presente caso, se tiene que los recursos interpuestos reúnen las formalidades legales requeridas antes enunciadas, por lo que este Despacho procederá a resolver los argumentos esbozados por los recurrentes, cuyo marco está definido, por las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados en relación con la situación creada por el acto administrativo objeto de recurso.

5.3. De las pruebas en el Proceso de Responsabilidad Fiscal:

Previo a decidir sobre el recurso de apelación propuesto, es necesario advertir que las pruebas en el proceso de responsabilidad, se encuentran reguladas en los artículos 22 al 32 de la Ley 610 de 2000, normas especiales que hacen alusión al fundamento probatorio de toda actuación dictada en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, la prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, la forma procesal para solicitarlas, la manera en que se niegan, la libertad para probar los elementos de la responsabilidad fiscal, su apreciación, el tratamiento para las inexistentes, así como la oportunidad para controvertirlas.

Complementario a ello, la Ley 1474 de 2011, en virtud de la cual se adoptaron medidas para la eficiencia y la eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción, en los artículos 107 y 108, precisó aspectos atinentes a los términos para la práctica de pruebas, predicando la perentoriedad de estos.

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

En ese entendido, la misma ley fiscal, les otorga a las pruebas en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, la importancia respecto a su tratamiento y formas, en observancia, además de los preceptos que las normas generales regulan sobre el particular, en lo no regulado por la misma, como lo que define su carácter: el ser un medio de conocimiento para el operador jurídico de la responsabilidad fiscal, que le permiten adoptar las decisiones que en derecho corresponden.

De ahí, al contemplarse en el artículo 25 de la Ley 610 de 2000, la libertad probatoria, el precepto es una directriz, en virtud de la cual, *"El daño patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos"*.

Finalmente, como lo dispone el artículo 26 de la mencionada normativa, los medios de prueba en el proceso de responsabilidad fiscal deben apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-202 de 2005, al hacer referencia a *"las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos"*, sostuvo, reiterando su jurisprudencia que:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el juez exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas.

Es decir, que dicha norma consagra, como sistema de valoración de la prueba en materia civil, el de la Sana crítica:

Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción"

Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configure una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

"Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas".

"El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no será sana crítica, sino libre

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual"

Bajo dichos preceptos, este Despacho procederá a estudiar los argumentos esgrimidos por los apelantes en los recursos de alzada interpuestos contra la decisión de negar la solicitud probatoria por ellos efectuada, así:

5.4. Caso en concreto:

Del recurso interpuesto por el apoderado de DIANA ROJAS BRÍÑEZ

En primer término, se tiene que el recurrente en el escrito de descargos planteó la existencia de nulidad de la actuación, fundamentando la misma en la causal establecida en el artículo 36 y siguientes de la Ley 610 de 2000, como lo es la violación al derecho de defensa por irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso, en razón de:

- i) Imputar responsabilidad fiscal con base en una norma inexecutable e inaplicable para el caso, pues se citó el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, artículo que hace referencia a los elementos de la responsabilidad fiscal, el cual en su consideración no se podía incluir en el pliego de cargos pues fue declarado inexecutable por la Sentencia C-090 de 2022 y estuvo vigente previamente al auto de imputación;
- ii) No cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, en tanto no son claros los elementos de responsabilidad sobre los que se imputa, pero además porque no describe cómo su defendida ejerció gestión fiscal, lo que conlleva a que no se conozca con claridad sobre que debe ejercer la defensa.
- iii) Inaplicación del artículo 47, relacionado con el archivo, pues de acuerdo con la decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria debía realizar un análisis amplio sobre el ejercicio de la gestión fiscal por parte de su defendida, lo cual de haberse realizado conllevaría al archivo de las diligencias.

Frente a ello, la primera instancia dispuso que se pronunciaría al momento de emitir fallo, pues dichos argumentos eran de fondo, por lo que no era procedente resolver en el trámite de nulidad, decisión con la cual el apelante manifestó no encontrarse conforme, pues su solicitud no fue objeto de pronunciamiento alguno.

Al respecto y una vez vistos y analizados los planteamientos expuestos por el recurrente, considera esta Delegada Intersectorial, que le asiste razón a la primera instancia, pues si bien el apoderado sustenta éstos como nulidades, todas versan sobre la defensa que realiza en virtud

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

de los descargos en ejercicio de su derecho de defensa, los cuales corresponden con los elementos de la responsabilidad fiscal, los que deberán ser resueltos al momento de emitir fallo, donde precisamente se verificaran y analizaran cada uno de los elementos sobre los cuales se edifica la responsabilidad fiscal.

Dicho lo anterior, se estudiará la conducencia³, pertinencia⁴ y utilidad⁵ de los medios probatorios negados dentro del proceso, así:

- *"Solicitar a la Cámara de Representantes informe, relacione y allegue copia -entre las fechas del 1 de febrero de 2011 al 30 de junio de 2011- de todos los actos administrativos firmados o visados por mi defendida, DIANA ROJAS BRÍÑEZ, en su calidad de Jefe de la División de Personal, incluyendo todo lo relacionado con las situaciones administrativas de los funcionarios de planta de la Cámara y los de UTL". Esta petición fue despachada desfavorablemente por la instancia de origen, al considerarla impertinente y carecer de utilidad para lo que busca probar el apoderado, referente a demostrar que no existió culpa grave en la actuación de la implicada, pues su apoderada tenía excesiva carga laboral.*

Efectivamente para este Despacho dicha prueba resulta -como lo dijo la primera instancia- impertinente e inútil, pues teniendo en cuenta el hecho generador investigado y el presunto daño causado, tal solicitud en nada impactaría la evaluación y decisión frente al mismo, pues lo que se investiga es el pago de una prima técnica sin cumplir las condiciones establecidas por la ley, y si en gracia de discusión, admitiéramos que la defensa de la señora ROJAS BRÍÑEZ, pretende demostrar una ausencia de culpa grave por excesiva carga laboral, caso en el cual podría resultar conducente la prueba, bastaría con un reporte de las actividades realizadas por la funcionaria en el período de tiempo que se emitieron las resoluciones objeto de cuestionamiento en esta causa fiscal, lo cual puede ser aportado como prueba documental.

Lo anterior, sin dejar de lado, que este argumento resultaría contradictorio con lo dicho también por el recurrente en los fundamentos que expuso para sustentar las otras pruebas, pues adujo que las decisiones tomadas por su prohijada se basaron en criterios jurídicos, ya establecidos.

³ Consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 15 de marzo de 2013, rad. No. 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227).

⁴ Hace alusión a la relación del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas "deben versar sobre hechos que conciernen al debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia". Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 05 de marzo de 2015, rad. No. 11001-03-28-000-2014-00111-00(S).

⁵ Radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto del 19 de agosto de 2010, rad. No. 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093).

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

- "Solicitar a la Cámara de Representantes se envíe (sic) copia integra de la hoja de vida de la señora JIMENA DEL PÍLAR RUÍZ VELASQUEZ, y se informe para la fecha de mayo y junio de 2011 en qué oficina se encontraba desarrollando sus funciones". Prueba que pretendía demostrar que no existió culpa grave por parte de la doctora Rojas, teniendo en cuenta que las conductas que se le imputaban estaban justificadas en la medida en que tenía una excesiva carga laboral, lo que le permitió confiar en la funcionaria con formación y experiencia suficientes en la entidad frente a temas jurídicos y de personal". Y,
- "Solicitar a la Cámara de Representantes se envíe relación y copia de todos los actos administrativos de la corporación por medio de los cuales se reconocieron y reglamentaron lo referente a primas técnicas proyectados por la funcionaria JIMENA DEL PILAR RUIZ VELASQUEZ". Sostuvo el apelante que su finalidad era demostrar la experticia y experiencia de la funcionaria que proyectó los actos administrativos objeto de estos procesos, para justificar la confianza que la investigada depositó en su trabajo.

Al respecto, debe decir este Despacho que dichas pruebas son impertinentes e inútiles, pues incluso si se decretaran y recibieran, las mismas no impactarían el estudio del caso aquí discutido, en tanto, como lo sostuvo la Contralora Intersectorial No. 1 de origen, esta investigación no recae sobre la señora Ruíz Velásquez, sino sobre la aquí implicada. Adicionalmente, debe agregarse que de conformidad con la conducta investigada, la emisión de concepto, suscripción de los actos administrativos que reconocieron dichas prestaciones y entendiendo la jerarquía del cargo de DIANA ROJAS BRÍÑEZ, y el manual de funciones que le correspondía cumplir, se desprende que era su deber velar por el cumplimiento y aplicación de las normas, así como verificar que los actos administrativos que debía suscribir en virtud de su cargo fueren conforme a la ley vigente, por lo que los elementos de prueba solicitados no contribuirían al proceso para la determinación del ejercicio o no de gestión fiscal por parte de la funcionaria ROJAS BRÍÑEZ.

En virtud de lo dicho, se confirmará lo dispuesto por la primera instancia.

- "Solicitar a la Cámara de Representantes se informe -entre el 01 junio del año 2011 y el 31 de octubre del 2013- qué servidores tenían la facultad de disponer, manejar o administrar recursos o fondos públicos relacionados con bienes o de contenido económico en la corporación y se informe con base en qué norma se encuentra regulado. Esta prueba tiene como objeto demostrar que DIANA ROJAS BRINEZ

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

en su calidad de Jefe de la División de Personal no ejercía gestión fiscal, porque no tenía la facultada de disposición o administración de recursos del erario".

En este punto, debe decirse que dicha solicitud es inconducente e inútil, pues no es el medio adecuado para probar el hecho, pues el ejercicio de gestión fiscal no solo se predica de quienes disponen y administran recursos públicos de la corporación, pero además en el expediente se cuenta con certificaciones del cargo desempeñado por la servidora, su manual de funciones, y los actos administrativos por ella suscritos, de lo cual se desprende, la relevancia de sus conceptos y el impacto que ello puede generar para la realización de los pagos aquí estudiados, elementos de los cuales podrá verificarse su ejercicio o no. En consecuencia, se confirmará su negativa.

Adicionalmente la categoría de gestor fiscal obedece a uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, la cual está sustentada en conceptos jurídicos que deben ser analizados por el funcionario de conocimiento de cara a la calidad de las actuaciones desplegadas por los presuntos responsables y con las pruebas recaudadas, pero en ningún caso se trata de una designación expresa realizada en actos administrativos.

Estudiadas las documentales pedidas, se analizarán las testimoniales que fueron recurridas:

- *"Se cite y practique diligencia de declaración juramentada de los funcionarios a quienes les fue reconocida la prima técnica objeto de investigación respecto de las siguientes personas: 1. CAYO RICARDO BUITRADO ESPEJO 2. HAROL ALFONSO BUSTAMANTE SOTO 3. ROSALBA CARVAJAL PARRA 4. CARMENZA CRUZ PARRA 5. GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO 6. DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ 7. HUMBERTO GUERRERO ACOSTA 8. ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO 9. AMANDA TINJACA RUIZ 10. HERNANDO RODRIGUEZ CASTILLA 11. ALVARO TORRES TELLEZ. Con la finalidad de que detallen como se realizó todo el proceso de solicitudes previas y de otorgamiento de beneficio mediante las resoluciones de prima técnica, entre otros aspectos".*

Agregó el apelante que estas declaraciones servirían para demostrar la ausencia del elemento culpa, pues se demostraría cuál fue la motivación de los beneficiarios, al insistir en el reconocimiento de la prima técnica, en tanto ello era objeto de debate en el Consejo de Estado y existían dos posiciones para su resolución.

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

Tal negativa, deberá ser confirmada, pues a todas luces, tal solicitud resulta inconducente e inútil para el proceso, ya que no tendría la agencia para desvirtuar el elemento culpa o para determinarlo, además tampoco demostraría la existencia de controversia en el tema de reconocimiento de manera alguna u en otro aspecto del proceso. Adicionalmente, de discutirse una posible inducción en error para el reconocimiento de la prima técnica, no sería la prueba testimonial de los mismos beneficiarios la llamada a probar tal debate, sino precisamente las decisiones y pronunciamientos jurisprudenciales objeto del mismo, así como la argumentación en relación con tal situación.

- "Se cite y practique diligencia de declaración juramentada al señor JAIRO JARAMILLO MATÍZ, Director Administrativo de la época. Este testimonio se solicita con la finalidad de demostrar que la suscripción de las resoluciones por parte de la investigada no comportó gestión fiscal y por lo mismo no fueron causa determinante para la producción del daño".
- "Se cite y practique diligencia de declaración juramentada al señor CARLOS ALBERTO FLORES ROJAS, jefe de la Dirección Jurídica de la época. Este testimonio se pide con la finalidad de que se informe los antecedentes judiciales y jurídicos de las resoluciones expedidas respecto del otorgamiento de prima técnica objeto de investigación y todo lo relacionado con la expedición de esta. Se solicita se pida la última dirección física, de correo electrónico de la anterior persona a la Cámara de Representantes para la citación a dicha diligencia ya que se desconoce su actual ubicación"
- "Se cite y practique diligencia de declaración juramentada a la señora JIMENA DEL PILAR RUIZ VELASQUEZ, funcionaria asesora que proyectó los actos administrativos de otorgamiento de primas técnicas. Este testimonio se pide con la finalidad de que se informe los antecedentes judiciales y jurídicos de las resoluciones expedidas respecto del otorgamiento de prima técnica objeto de investigación y todo lo relacionado con la expedición de estas"

Las anteriores solicitudes fueron negadas por la contralora intersectorial No. 1 de instancia, por carecer de los requisitos de utilidad y conducencia, al estimar que la finalidad con que fueron solicitadas no eran objeto directo de debate en la presente actuación, así mismo, aduciendo que los actos administrativos originarios del daño investigado ya se encontraban establecidos conforme las disposiciones normativas que regulan dicha materia y los mismos reposaban en el expediente.

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

Al respecto, este Despacho confirmará la negativa de instancia, pues considera que, al ser un debate de derecho, éstos no son conducentes y en caso de recibirlos no lograrían desvirtuar los hechos que se investigan, pues independientemente del ejercicio y criterio de los profesionales, a la investigada le asistían unas responsabilidades que se desprenden del manual de funciones como servidora pública y es con base en ellos y la normatividad vigente para la época de los hechos que debe surtir el análisis de la conducta, por los que dichos testimonios no lograrían desvirtuar la presunta responsabilidad que aquí se investiga.

Adicionalmente, debe señalarse que era obligación del petente, de acuerdo con el artículo 212 del Código General del Proceso, informar al despacho el nombre, domicilio, residencia y lugar donde podían ser citadas las personas a testificar y al no haberse cumplido con esta obligación, no resultaría viable atender favorablemente su petición.

Del recurso incoado por el apoderado de **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA**:

El recurrente argumentó sobre la importancia del decreto de las pruebas testimoniales solicitadas, consideró que éstas se orientaban a probar lo que sustentó en sus descargos, pues fueron diversos servidores los encargados del estudio, evaluación, aprobación y ejecución de actos administrativos que otorgaron unas primas técnicas amparadas en una presunción de legalidad, seguridad y certeza, por lo que resultaba importante escucharlos para que den cuenta de su actuar al respecto, así como su criterio profesional y jurídico sobre la materia, las razones y criterios que los llevaron a la realización de los mismos.

Así, expuso respecto a cada una de ellas, las razones por las cuales el *a quo* no debió negarlas, como a continuación se estudiará:

- "Escuchar en diligencia de declaración juramentada a: CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; JAIRO JARAMILLO MATIZ, Director Administrativo de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS, Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes para la época de los hechos; ALVARO DE JESUS MIERS GUTIERREZ, Jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes para la época de los hechos y sigue actualmente en el mismo cargo; El servidor o servidora que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010" en donde se "Consideró la viabilidad jurídica de reajustar primas técnicas de

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

funcionarios de planta de personal vinculados a carrera administrativa cuantos están en encargo"

Sostuvo el recurrente que las mismas eran conducentes, pertinentes y útiles para la presente investigación, al señalar que fueron las personas que en su momento conocieron directamente los fundamentos fácticos y jurídicos de la viabilidad de otorgar la prima técnica. Así mismo, informarían al Despacho, el procedimiento de estudio, evaluación, aprobación y ejecución del reconocimiento y pago de las primas técnicas cuestionadas, indicando las dependencias que realizaron cada una de dichas etapas; De otra parte, se conocería cuáles fueron los fundamentos que tuvo la persona que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010 y se les interrogaría cuál fue la función que en dicho proceso tuvo a cargo su investigada, en calidad de Jefe de la División Financiera y Presupuesto de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, para la época de los hechos.

En primer lugar, este Despacho considera que la solicitud de llamar al funcionario que emitió el concepto D.J.4.2.0191.2010 de fecha 15 de marzo de 2010 es inútil para el proceso, pues el documento, como dijo la primera instancia, obra en el proceso, es decir, se tiene conocimiento de su contenido para el análisis en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente. En segundo lugar, observa este Despacho que se cuenta en el expediente con la certificación laboral y de funciones de la funcionaria investigada, por lo que no se encuentra razón en determinar en qué etapa conoció del proceso de otorgamiento de primas técnicas.

En cuanto a los testimonios solicitados, este Despacho reitera lo señalado arriba para negar las declaraciones requeridas por el otro apoderado, pues las considera inconducentes.

Finalmente, vale la pena señalar, que concuerda este despacho con lo manifestado por la instancia de origen, al considerar que el recurrente no cumplió con la carga de la prueba y no es posible que se llamen 14 personas al proceso, sin informar siquiera los datos de citación de los mismos, no siendo esta instancia la que procederá a ello.

Por lo expuesto, se confirmará la decisión de la primera instancia.

Conocido lo anterior, se procederá a estudiar las pruebas Documentales negadas:

- "Se solicite a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, haga llegar con destino al presente proceso, copia de la nota interna que el Director Administrativo y Financiero de entonces (Dr. Jairo Jaramillo Matíz), le dirigiera a la



AUTO

SALA FISCAL Y SANCIONATORIA

NÚMERO: ORD-801119- 078 - 2023

FECHA: 4 DE JULIO DE 2023

PÁGINA NÚMERO: 22 de 24

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

Dra. BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, en calidad de Jefe de la División Financiera y Presupuesto de dicha Corporación, solicitándole disponer el rubro presupuestal necesario para la provisión y pago de las primas técnicas autorizadas en las resoluciones Nros. 1356, 1354, 1348, 1349, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 1º de junio de 2011".

Dijo el apoderado, que la prueba documental solicitada es conducente, pertinente y útil, pues servirá para corroborar que la principal función realizada por su representada en el trámite del aval y suscripción de las resoluciones fue netamente el de apropiación presupuestal "ordenada" por el entonces Director de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, es decir, el documento por medio del cual debía cumplir una orden de su superior.

Solicitud que fue negada por el Despacho de origen, decisión que será confirmada por esta Contralora Delegada, pues no la considera conducente, pertinente y útil al proceso, no contribuiría para desligarla de la presunta responsabilidad que se le endilga, ni para el análisis de los elementos de la responsabilidad al momento de emitir el fallo. Además estima este Despacho que de haber recibido la implicada dicha instrucción como lo señaló el apoderado, ello no sería un eximente de responsabilidad, pues entonces no tendría sentido el nombramiento de una funcionaria con las calidades de la investigada, a quién le correspondían funciones propias que debía asumir y de seguir instrucciones en cualquier caso debían realizarse de conformidad con ellas, así como desde su conocimiento y formación, por lo que una nota interna no impactaría en el análisis de los elementos de responsabilidad.

Tampoco encuentra este Despacho objeto alguno para revocar la negativa en: "solicitar a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, haga llegar con destino a la presente investigación copia del Manuel (sic) de procedimiento que para la época de los hechos tuvo en cuenta para la evaluación de desempeño de sus funcionarios de carrera administrativa, con miras al estudio, evaluación, aprobación y ejecución de las primas técnicas otorgadas a los funcionarios beneficiados con las resoluciones", pues éstas obran en el expediente, y a partir de ellas, se puede verificar su motivación. Además, se cuenta con prueba relacionada ordenada mediante Auto URF1-0190 del 23 de agosto de 2022, en cuanto a los procedimientos establecidos como lo dijo el despacho de origen, por lo que su solicitud resultaría inútil para el proceso.

De otro lado, la defensa de la investigada solicitó que se le permita a BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, rendir ampliación de su versión libre, una vez se hayan recaudado cada una de las pruebas antes relacionadas, con miras a que pueda pronunciarse en punto a cada una de ellas y sus explicaciones frente a la imputación de responsabilidad fiscal objeto del presente proceso,

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

petición que fue negada por la primera instancia, al considerar que ello no era una prueba como tal y que este derecho había sido ejercido por la implicada de conformidad con el artículo 42 de la Ley 610 de 2000.

Al respecto y de acuerdo con lo expresado por la primera instancia, se debe aclarar en primera medida que este es un derecho establecido en el marco del proceso de responsabilidad fiscal y no una prueba, facultad de la cual ya dispuso la implicada, y adicionalmente es importante manifestar que dentro del proceso, se cuenta con la etapa para alegar de conclusión, de la cual puede hacer uso la investigada para ejercer su defensa y realizar las manifestaciones que considere pertinentes en cuanto al desarrollo del proceso y las pruebas recaudadas, lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de fallar. Por lo expuesto, se confirmará la decisión tomada por el Despacho de origen.

En este orden de ideas atendiendo que en todo el ordenamiento jurídico, sin distinción de su especialidad, el debate probatorio está orientado por los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, ya mencionados en este proveído, los que conducen al funcionario de conocimiento a acercarse en mayor y mejor medida a la verdad, que es el fin último de cada proceso, y una vez analizados en el presente caso dichos elementos respecto a las pruebas solicitadas por los apoderados de las investigadas, se tiene que las mismas no reúnen dichos requisitos.

Por lo expuesto, se confirmará con fundamento en los argumentos arriba expuestos la negativa dispuesta por la primera instancia en su integridad.

VI. CONCLUSIONES

Concluye esta instancia de alzada en confirmar en su integridad lo resuelto en el Auto No. 00054 de 17 de marzo de 2023 y en el Auto No. URF1-00143 de 30 de mayo de 2023 que resolvió el recurso de reposición, en lo que se refiere a negar las pruebas testimoniales solicitadas por los apoderados de las investigadas DIANA ROJAS BRIÑEZ y BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, por cuanto las pruebas solicitadas no cumplen con los requisitos de conducencia, pertinencia y/o utilidad exigida para decretar las mismas, ni este Despacho bajo el análisis realizado y, de acuerdo a la sana crítica, las considera procedentes. En ese sentido, no se accederá a realizar nuevamente la diligencia de versión libre solicitada por el apoderado de la investigada SALAZAR BONILLA, al haberse surtido previamente y contar aún con una etapa del proceso, donde pueden allegarse consideraciones en relación al desarrollo del asunto y manifestarse frente a las pruebas obrantes en el mismo.



AUTO

SALA FISCAL Y SANCIONATORIA

NÚMERO: ORD-801119- 078 - 2023

FECHA: 4 DE JULIO DE 2023

PÁGINA NÚMERO: 24 de 24

"Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación en contra del auto que negó pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF- 88112-2017-002"

Tampoco este Despacho observa la configuración de detrimento a sus intereses, respecto de las pretensiones, razones por las cuales se confirmará la decisión objeto de reproche.

Ciertamente en la legislación colombiana no existe esta tarifa legal, empero este argumento no es óbice para que se proceda al decreto y práctica de pruebas de manera indiscriminada, ya que corresponde al operador motivar el decreto de éstas, lo que se traduce en que también tenga la potestad de rechazar aquellas que no cumplen con la pertinencia, conducencia y utilidad, criterios que fueron analizados en precedencia y conllevan a su rechazo.

En mérito de lo expuesto, la Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República,

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el Auto No. 00054 de 17 de marzo de 2023, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No. 1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República y lo dispuesto en el Auto No. URF1-00143 de 30 de mayo de 2023 emitido por la misma funcionaria, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente decisión.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por estado la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011; a través de la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO TERCERO: DEVOLVER el expediente a la dependencia de origen para lo de su competencia y tramites subsiguientes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


BEATRÍZ ELENA GARCÍA ESTRADA
Contralora Delegada Intersectorial No. 4
Sala Fiscal y Sancionatoria

Proyectó: Mónica Lucero M (C)